

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, dos (02) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05360310500120160044001, promovido por la señora **LUZ AMPARO CANO PATIÑO**, en contra de la Sociedad **BRILLADORA ESMERALDA LIMITADA LIQUIDADA** y el **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**, con la finalidad de resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante, frente a la sentencia emitida el 13 de septiembre de 2018 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **240**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Pretende la demandante se declare que entre esta y la Brilladora Esmeralda Ltda. (hoy liquidada), existió un contrato de trabajo de naturaleza indefinida, simulado por un contrato de obra o labor, entre el 2 de mayo de 2012 y el 11 de mayo de 2013, y que el Departamento de Antioquia fue el beneficiario final del servicio, debiéndose declarar la solidaridad extensiva con este último. Como consecuencia de lo anterior solicita se condene a las demandadas a los siguientes conceptos: 24 días de salario de diciembre de 2012; 30 días del mes de enero; 11 días por el mes de febrero y 11 por marzo los tres últimos periodos del año 2013; el pago de las cesantías e intereses a las mismas proporcional al tiempo laborado; el pago de la indemnización moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 desde el 14 de febrero de 2013, por no haber consignado las cesantías a un fondo administrador; el pago de la prima de servicios proporcional por al tiempo laborado; el pago de las vacaciones proporcionales, compensadas en dinero; el pago de la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, por no haber pagado los salarios y prestaciones sociales adeudados al momento de la terminación del contrato de trabajo; el pago de intereses, a partir del mes 25, sobre el capital adeudado; el pago de la indemnización por despido injusto; el pago de las dotaciones para desempeñar la labor; el pago del subsidio de transporte por el tiempo laborado, y; la indexación, lo que ultra y extra petita se encuentre probado en el juicio y las costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones expuso que celebró contrato de obra con la empresa Brilladora la Esmeralda en la prestación de servicios de aseo y servicios generales, del 02/05/2012 al 11/05/2013, prestando sus servicios de manera personal en la institución educativa rural Alto del Corral del Municipio de Heliconia - Antioquia, ocultándose la verdadera relación laboral.

Que la Secretaria de Educación para la Cultura – Departamento de Antioquia celebró un contrato de servicios con la empresa Brilladora Esmeralda, para la prestación de servicios de aseo, mantenimiento y servicios generales para todos

los tipos de instituciones y ciudadelas educativas, por lo cual es solidariamente responsable por el pago de todas las acreencias laborales adeudadas.

Que su contrato realidad lo fue a término indefinido, devengando un SMLMV para el año 2013, ejecutando la labor personalmente, atendiendo las instrucciones del empleador y/o del Rector de la Institución Educativa o de uno de sus dependientes, cumpliendo un horario y con las herramientas suministradas por la Institución Educativa.

Que le adeudan como salario 24 días de diciembre de 2012; 30 días del mes de enero; 11 días por el mes de febrero y 11 por mayo del año 2013, fecha en la cual se le informó de manera escrita la terminación del contrato laboral, sin existir causa legal alguna; y que no le cancelaron las prestaciones sociales, el subsidio de transporte, ni la dotación obligatoria y mucho menos las indemnizaciones a que tiene derecho.

Respecto al líbello genitor, los demandados en su oportunidad procesal expusieron:

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. Negó haber sido empleador de la accionante y en virtud de ello adujo no constarle las circunstancias de tiempo, modo y lugar relatadas en el escrito inicial relacionadas con el presunto vínculo laboral. Aclaró que el servicio de aseo en las instituciones educativas, lo prestó un tercero a través de los contratos de servicios de aseo y servicios generales suscritos entre su Secretaría de Educación y la Brilladora La Esmeralda Ltda. (Contratos 2012-SS-15-0047 y 2013-SS-15-0025). Agregó en cuanto a la responsabilidad que deseaba endilgársele, que el ente territorial funge como un mero administrador de los recursos que gira el Ministerio de Educación, según lo prevé el artículo 17 de la Ley 715 de 2001. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y formuló como las excepciones de: falta de legitimación en la causa por pasiva, falta de integración del Litis necesario con la Nación-Ministerio de Educación, ineptitud sustancial de la demanda, inexistencia de la obligación, prescripción y la genérica.

CURADOR AD LITEM BRILLADORA ESMERALDA LTDA: Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de Merito denominadas Inexistencia de la relación laboral, fuerza mayo legal en el supuesto de mora, prescripción, caducidad y la Genérica.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

ABSOLVIÓ a las demandadas de las pretensiones de la demanda; y condenó a la demandante al pago de las costas procesales.

RECURSO DE APELACIÓN

DE LA PARTE DEMANDANTE. Que presenta recurso de apelación contra la decisión de primera instancia en cuanto negó todas las pretensiones de la demanda, argumenta que el *a quo* no se realizó un correcto estudio de los elementos esenciales del contrato de trabajo, y por el contrario, confundió la figura del jefe inmediato con el de verdadero empleador.

Que el empleador siempre fue la sociedad Brilladora Esmeralda con quien la demandante suscribió su contrato laboral, quien le daba las órdenes, le pagaba el salario, fue dicha sociedad quien envió a la trabajadora a laborar en la Institución Educativa y le finalizó el contrato laboral.

Que se debe declarar la solidaridad con el Departamento de Antioquia, pues esta última se benefició de las labores desarrolladas por la trabajadora.

Que se debe reconocer y pagar todas las acreencias laborales pretendidas desde la formulación de la demanda, y más cuando se demostró al interior del proceso que la sociedad demandada actuó de mala fe.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

LA PARTE DEMANDANTE. En resumen, manifiesta que la sociedad Brilladora Esmeralda fue quien contrato a la demandante, escogió la modalidad contractual, estableciendo que fuera una relación de trabajo, estableció cumplimiento de horario, fechas de nómina, autorizo el trabajo nocturno y festivo y termino la relación de trabajo, y era quien pagaba el salario.

Que la sociedad Brilladora Esmeralda Limitada y El Departamento de Antioquia, no demostraron el pago de los salarios reclamados ni las prestaciones sociales pretendidas, como las cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones; siendo procedente su condena, con las respectivas indemnizaciones.

PROBLEMA JURÍDICO

Determinar si en el presente proceso se probó o no la existencia de la relación laboral entre la demandante y la empresa Brilladora la Esmeralda Ltda. y en cuales extremos; y en caso positivo, verificar la procedencia del pago de las prestaciones sociales y de las indemnizaciones; así como de la solidaridad respecto al Departamento de Antioquia. Finalmente se estudiará lo relativo a la imposición de Costas Procesales y a la procedencia de la indexación.

CONSIDERACIONES

Sea lo primero indicar que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con los Arts. 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

DE LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO

En primer término, se tiene que el contrato de trabajo es un acuerdo celebrado entre dos partes, una de ellas denominada trabajador y otra empleadora, donde el

primero presta personalmente sus servicios orientado bajo la subordinación hacia el segundo, y recibiendo una contraprestación denominada salario.

En aras de equilibrar la relación desigual entre las partes consecuente al poder subordinante del empleador, el legislador, consagró un mínimo de derechos y garantías, que propenden por el respeto a la dignidad del trabajador.

Para ello, el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, delimitó tres elementos para diferenciar el contrato de trabajo de otros que pudiera darse en el desarrollo de las relaciones humanas, así:

“...ARTICULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES.

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen...”.

Por su parte, en el artículo 24 ibídem se precisa:

“...Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo...”.

Presunción que es de carácter legal, o sea que admite prueba en contrario, lo cual faculta al supuesto empleador para contraprobarla y de tal manera entrar a desvirtuarla.

Sobre lo anterior, la Sala de Casación Laboral de la C. S. de J., en Sentencia del 8 de junio de 2016, Radicado 47.385, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, reiterando el criterio que de antaño ha adocinado la Corporación, señaló:

“... para la configuración del contrato de trabajo se requiere que esté demostrada la actividad personal del trabajador a favor del demandado, y en lo que respecta a la continuada subordinación jurídica -que es el elemento característico y diferenciador de toda relación de carácter laboral-, no es menester su acreditación cuando se encuentra evidenciada esa prestación del servicio, dado que en tal evento, lo pertinente es hacer uso de la presunción legal prevista en el artículo 24 del CST, modificado por el art. 2° de la L. 50/1990, según el cual «se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo»

De acuerdo con lo anterior, al actor le basta con probar en el curso de la Litis, su actividad personal, para que se presuma en su favor el contrato de trabajo, y es al empleador a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción, demostrando que la relación fue independiente y no subordinada.”.

Criterio reiterado en sentencias CSJ SL, 13 abr. 2010, rad. 34223; SL4027-2017, SL 365 de 2019 y SL2976-2020, Radicación n.º 68876 del 11 de agosto de dos 2020, entre otras.

Es de advertir, que la presunción en comento, además de ser susceptible de ser desvirtuada, no releva a la parte actora de otras cargas probatorias, tales como acreditar los extremos temporales de la relación, el monto del salario, su jornada laboral, el trabajo en tiempo suplementario si lo alega, el hecho del despido cuando se demanda la indemnización por terminación del vínculo sin justa causa, entre otros. Al respecto indicó la Honorable Corte Suprema de justicia Sala de Casación Laboral, en sentencia del 6 de marzo de 2012:

*“...recuerda la Corte que la circunstancia de quedar demostrada la prestación personal del servicio, debiéndose presumir la existencia del contrato de trabajo en los términos del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, **no releva al demandante de otras cargas probatorias, pues además le atañe acreditar ciertos supuestos transcendentales dentro de esta clase de reclamación de derechos, como por ejemplo los extremos temporales de la relación, el monto del salario, su jornada laboral, el trabajo en tiempo suplementario si lo alega, el hecho del despido cuando se demanda la indemnización por terminación del vínculo sin justa causa, entre otros.***

De antaño se ha considerado como principio universal en cuestión de la carga probatoria, que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, obligando a su vez a quien pretende o demanda un derecho, que alegue y demuestre los hechos que lo gestan, o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba a la parte contraria, cuando se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar

la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado...”

Así lo ha reiterado dicha corporación en sentencias 36748 de 2009, SL 9156 de 2015, SL 11156 de 2017, SL 4912 de 2020 y SL 1430 de 2021 entre otras.

MATERIAL PROBATORIO:

- **PRUEBA DOCUMENTAL.**

- Copia del contrato suscrito entre la demandante y la sociedad Brilladora Esmeralda Ltda., en la modalidad de obra o labor contratada, el cual presenta firma de las partes y sello de la demandada, pero no presenta fecha de inicio ni de suscripción del mismo (folios 29 a 31 anexo 03).
- Certificado laboral suscrito por Brilladora Esmeralda Ltda. mediante el cual se indica que la actora laboró para dicha sociedad desde el 02/05/2012, en el cargo de oficios varios devengando un SMLMV (folio 32 anexo 03).
- Carta de terminación del contrato laboral elaborada por la sociedad demanda y dirigida a la demandante, efectivo a partir del 11/05/2013 (folio 33 anexo 03).
- Copia de Requerimiento realizado por la Secretaria de Educación departamental -Departamento de Antioquia- a la Sociedad Brilladora Esmeralda Ltda. frente al pago de prestaciones sociales y salarios respecto del personal de aseo y servicios generales contratadas en desarrollo del contrato 2012SS150047 (folio 59 anexo 03).
- Copia del Contrato 2012SS150047 suscrito entre la Secretaria de Educación de Antioquia -Departamento de Antioquia- y la sociedad Brilladora Esmeralda Ltda. el 23/04/2012 (folios 62 a 69 anexo 03).
- Copia del Contrato 2013SS150025 suscrito entre la Secretaria de Educación de Antioquia -Departamento de Antioquia- y la sociedad Brilladora Esmeralda Ltda. el 13/02/2013 (folios 70 a 76 anexo 03).
- Circulares 010 del 05/02/2013 y 011 del mes de abril/2013 mediante las cuales la empresa Brilladora la Esmeralda informa del no pago oportuno

de salario de sus trabajadores correspondiente a la 2da quincena del mes de enero y de los primeros 11 días del mes de febrero de dicha anualidad respectivamente (folios 83 y 84 anexo 03).

- PRUEBA TESTIMONIAL

- Interrogatorio de parte – demandante-:

Indica que trabajo en la Institución Educativa Altos del Corral como auxiliar de aseo, que utilizaba como herramientas de trabajo un traperero, escoba, y elementos suministrados por dicha institución. Que las instrucciones eran impartidas por el rector de la Institución educativa pero que dichas directrices fueron suministradas por la sociedad demandada, y que era esta última quien le pagaba su salario mediante abono a cuenta Bancolombia.

- Declaración testigo de la parte demandante – Sr. Didier Horacio Villegas.

Manifiesta que laboró como vigilante en la Institución Educativa Altos del Corral, que fue compañero de trabajo de la demandante, que laboraron por el mismo periodo en dicha institución; esto es, del 02/05/2012 al 11/05/2013. Que fue contratado por la sociedad Brilladora Esmeralda Ltda., quien los envió con una carta de presentación ante el rector de dicha institución.

Afirma que la demandante era la encargada del aseo en la Institución Educativa, que las funciones eran asignadas por el rector, pero siguiendo las circulares suministradas por Brilladora Esmeralda Ltda. Que tenían un horario de 7 am a 4:30 pm, que este era igual para todos los empleados de la Institución y que su salario lo era por valor del SMLMV el cual les era cancelado mediante consignación bancaria. Y que fue la sociedad demandada Brilladora Esmeralda quien les dio por terminado sus contratos laborales.

Descendiendo al caso, de acuerdo con la normativa vigente, cuando se pretende la declaratoria de un contrato de trabajo, opera como ya se dijo una presunción consistente en que una vez probada la prestación personal del servicio, se presume que la relación estuvo regida por un contrato de trabajo, carga de la prueba que cumplió la demandante quien demostró no solo con la prueba testimonial sino también con la documental (folios 29 a 33 del anexo 03 del expediente digital) que dicha prestación y beneficio se dio para la sociedad Brilladora Esmeralda Ltda. (hoy liquidada), pues fue con dicho empleador con

quien se suscribió el contrato laboral y fue dicha sociedad quien la envió a prestar sus servicios a la Institución Educativa Altos del Corral del Municipio de Heliconia, según informa el testigo Sr. Didier Horacio Villegas mediante “Carta de instrucciones”, todo ello aunado a que dicha presunción no fue desvirtuada por la parte demandada, al no presentar prueba alguna al interior del proceso.

Ahora, en criterio de la Sala y en aplicación del principio de libre apreciación de las pruebas consagrado en el artículo 61 del CPT y de la SS, quedó suficientemente demostrado que fue la sociedad demandada Brilladora Esmeralda Ltda. quien emitía las órdenes e instrucciones a la demandante, por conducto del Rector de la Institución, y además de ello, según la prueba testimonial la actora cumplía su labor dentro del horario laboral de 7:00 am a 4:30 pm como Auxiliar de aseo, de forma habitual y permanente. Razón suficiente para declarar la existencia de un contrato laboral con la empresa demandada a término indefinido, y es que no desconoce esta Sala que al interior del expediente yace copia de un contrato de trabajo denominado “por obra o labor determinada” y el cual está suscrito por las partes en litigio, pero dicho documento no consagra ni la fecha de suscripción o firma y mucho menos la fecha de inicio de la supuesta obra, supuestos indispensables para tener por probado el contrato de obra referido.

Así las cosas, en cuanto a los extremos, considera la Sala que la relación laboral se presentó entre las citadas partes entre el **02/05/2012 al 11/05/2013**, toda vez que así lo detallan los certificados laborales emitidos por la propia sociedad demandada Brilladora Esmeralda Ltda. obrantes a folios 29 a 33 anexo 03, sin que las partes hayan presentado oposición o tacha alguna frente a los mismos.

En cuanto al Salario devengado por la demandante, de conformidad con el Certificado obrante a folio 29 y la prueba testimonial ya citada, la misma devengaba un SMLMV (\$589.500- 2013), todo lo anterior permite a esta Sala **REVOCAR** la decisión de primera instancia y en su lugar **DECLARAR** la existencia de la relación laboral pretendida.

SOLIDARIDAD

El artículo 34 del CST enuncia:

*1o) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos {empleadores} y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. **Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores,** solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores.*

Sobre el tema de la Solidaridad, la CSJ SCL en SL 14696 del 13 de septiembre de 2017, Rdo.: 45272, indicó que ella se presenta cuando la actividad ejecutada por el contratista independiente cubre una necesidad propia del beneficiario y cuando constituye una función directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto social, precisando que para su determinación puede tenerse en cuenta no sólo el objeto social del contratista y del beneficiario de la obra, sino también las características de la actividad específica desarrollada.

Con la anterior disposición, lo que buscó el legislador fue evitar que los derechos laborales de los trabajadores fueran evadidos por empleadores, acudiendo a personalizar la entidad del empleador directo en terceros, así lo ha explicado la jurisprudencia especializada, entre otras, en sentencias SL35864 de 2010, SL601 de 2018, SL4928 de 2019, reflexionándose en la última de estas lo siguiente:

“

Para la Corte, en síntesis, lo que se busca con la solidaridad laboral del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo es que la contratación con un contratista independiente para que realice una obra o preste servicios, no se convierta en un mecanismo utilizado por las empresas para evadir el cumplimiento de obligaciones laborales. Por manera que, si una actividad directamente vinculada con el objeto económico principal de la empresa se contrata para que la preste un tercero, pero utilizando trabajadores, existirá una responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones laborales de esos trabajadores...”

No se puede desconocer como la Educación es un servicio público regulado por la Ley 715 de 2001, mediante la cual se dictan normas orgánicas en materia de

recursos y competencias, en desarrollo de los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política, y en su artículo 6° le asigna a los departamentos la prestación de asistencia técnica educativa, financiera y administrativa a los municipios para la eficiente prestación de dicho servicio público, que a su vez se constituye en un derecho fundamental (artículo 67 CP). A la par, respecto de los municipios no certificados, el numeral 6.2.4 del citado artículo del estatuto en mención radica en cabeza de los entes territoriales la financiación de los servicios educativos a cargo del Estado, haciéndole cargo de los proyectos educativos, pero también de “las inversiones de infraestructura, calidad y dotación”.

Ahora, no se puede desconocer que existe una relación de causalidad entre la labor contratada con la codemandada empleadora y el giro ordinario de las actividades del Departamento de Antioquia, dado que se tiene acreditado que las actividades que desarrolló la demandante en servicios generales dentro de la institución educativa Altos del Corral en el Municipio de Heliconia, se circunscriben a las actividades normales y corrientes del ente territorial demandado, dado que en este asunto la actividad de la actora no es extraña, pues respalda la prestación del servicio de educación, el cual constituye un servicio público que beneficia directamente a la comunidad y que presta el ente territorial; máxime que el art. 13 # 3 del decreto 4791/2008 prohíbe a las instituciones educativas contratar por sí mismos los servicios de aseo y vigilancia, lo cual sí es permitido a los entes territoriales.

De lo anterior se constata que la labor contratada por el Departamento de Antioquia como dueño de la obra a la empresa Brilladora la Esmeralda Ltda. como contratista, no es extraña al giro ordinario de sus negocios, de lo que se deriva que la primera es solidariamente responsable en el pago de las condenas que en esta sede se impongan en favor de la parte actora.

DE LA PRESCRIPCIÓN.

Como bien fue concluido por esta Sala en el acápite anterior, el Departamento de Antioquia se encuentra demandado en solidaridad por ser beneficiario de la obra,

y como quedó acreditado fue el directo favorecido de las actividades laborales desempeñadas por la trabajadora, por lo tanto, las demandadas son deudoras solidarias de las acreencias pretendidas, lo que significa que, al existir solidaridad de las obligaciones, la interrupción de la prescripción respecto de un deudor, se impone para el otro, así lo establece el artículo 2540 del C.C., que es aplicable en la materia por remisión expresa que hace el art. 19 del CST, norma que dispone que: “*La interrupción que obra a favor de uno o varios coacreedores, no aprovecha a los otros, ni la que obra en perjuicio de uno o varios codeudores, perjudica a los otros, **a menos que haya solidaridad**, y no se haya esta renunciado en los términos del artículo 1573, o que la obligación sea indivisible*” (Negrillas y subrayas de la Sala).

Así las cosas, la reclamación administrativa que realizó la demandante el 08/04/2016 al Departamento de Antioquia, tuvo la virtualidad de interrumpir la prescripción que venía operando tanto a favor del ente territorial, como de la sociedad que fungió como empleadora, ambas deudoras solidarias al tenor del art. 34 del CST, por un término igual, esto es, por tres años, y como la demanda fue presentada el 02/08/2016, evidentemente no se configuró el fenómeno extintivo.

Es más, BRILLADORA inicio su proceso de liquidación el 24 de febrero de 2014, la prescripción de los créditos que estaban a cargo de esta empresa, entre ellos los laborales que ahora se reclaman, y que se hicieron exigibles el 11 de mayo de 2013 (terminación del contrato laboral a la demandante) se interrumpieron el 24 de febrero de 2014, con la apertura del proceso de liquidación, y como se indicó, la demanda fue presentada el 02/08/2016, fecha para la cual el proceso de liquidación estaba en curso, luego ninguna de las acreencias laborales se encuentran afectadas, esto conforme al artículo 72 de la Ley 1116 de 2006, que establece:

«INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN E INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD. Desde el inicio del proceso de reorganización o de liquidación judicial, y durante la ejecución del acuerdo de reorganización o de adjudicación queda interrumpido el término de prescripción y no operará la caducidad de las acciones respecto de los créditos causados contra el deudor antes del inicio del proceso.»

¹ Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones.

Por las anteriores razones, esta Sala considera que no opera el fenómeno jurídico de la prescripción, frente a las pretensiones esbozadas por la parte demandante.

AUXILIO DE TRANSPORTE

La Ley 15/59 creó tal auxilio del cual gozan los trabajadores cuya remuneración mensual no sea superior a dos (2) salarios mínimos. Esta prestación por no corresponder a una retribución del servicio sino a una ayuda para facilitar el traslado del trabajador desde su vivienda hasta el sitio de labores, en principio, no constituye salario. No obstante, el artículo 7 de la Ley 1/63 dispuso su inclusión como tal en la liquidación de prestaciones sociales, mas no para efectos de liquidar vacaciones.

Respecto a tal Auxilio, considera la Sala que por devengar el trabajador menos del tope antes aludido, tiene derecho a su pago por parte del empleador, y dado que éste no probó que el trabajador no requería tal auxilio conforme a la norma en cita, se **CONDENARÁ** al pago de dicho concepto por el interregno de duración del contrato de trabajo, esto es, entre el 2 de mayo de 2012 y el 11 del mismo mes del año 2013.

En consecuencia, para el año 2012, por 239 días, teniendo en cuenta que el valor del subsidio fue fijado en \$67.800 mensuales (decreto 4963 de 2011), le corresponde a la trabajadora un total de \$540.140. Y para el año 2013, por 131 días teniendo en cuenta que el valor del subsidio fue fijado en \$70.500 mensuales (decreto 2739 de 2012), se le adeuda a la actora la suma de \$307.850, siendo en total por dicho concepto **\$847.990**.

DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR.

Al respecto, el artículo 230 del CST establece la obligación de entregar al trabajador una dotación de calzado y vestido de labor cada cuatro (4) meses. Igualmente, el artículo 234 ibídem prohíbe su compensación en dinero.

Así las cosas, si el contrato finaliza sin que el empleador haya cumplido cabalmente con la entrega de la dotación de labor, podrá el trabajador reclamar los perjuicios que ello le hubiere ocasionado. No obstante, dentro de este juicio no figura elemento demostrativo de los perjuicios y su cuantía, razón por la cual se absuelve de la referida pretensión.

SALARIOS ADEUDADOS

La parte demandada mediante Circulares 010 del 05/02/2013 y 011 del mes de abril/2013 informó a la demandante el no pago oportuno del salario correspondiente a la 2da quincena del mes de enero y de los primeros 11 días del mes de febrero de 2013; y la prueba testimonial fue coincidente en establecer que dichos salarios sumados a los 24 días de diciembre de 2012 y los 11 días de mayo de 2013 nunca les fueron cancelados, por lo cual constituye una negación indefinida que traslada la carga de la prueba de dicho pago a la parte demandada, la cual no aportó elemento demostrativo alguno al respecto en el proceso.

Por lo anterior, teniendo en cuenta un SMLMV para el año 2012 de \$566.700 y para el 2013 de \$589.500 la sociedad demandada adeuda a la demandante la suma de **\$1.180.410**.

CESANTÍAS E INTERESES A LAS CESANTÍAS

La Ley 50 de 1990 artículos 98 y 99, estableció un nuevo régimen para los trabajadores vinculados a partir del 1º de enero de 1991 o quienes estando laborando a esa fecha manifiesten su deseo de acogerse a ese sistema, consistente en una liquidación anual con corte a 31 de diciembre y su posterior consignación en un fondo a más tardar el 14 de febrero siguiente.

En este punto debe aclararse, que las cesantías así se tengan que consignar anualmente en un fondo, se hacen exigibles a la terminación del contrato de trabajo, ya que por la naturaleza y finalidad de esta prestación social, destinada a atenuar las vicisitudes que pudieren sobrevenir de la condición de cesante en que

podiera encontrarse el trabajador, solo a la finalización del vínculo aquél podría beneficiarse sin las limitaciones exigidas en los casos en que durante la vigencia de la relación laboral necesitara anticipos parciales o préstamos sobre las mismas, lo que significa que desde el día siguiente a culminarse el contrato resulta dable contar con la efectiva libertad de disposición (sentencia CSJ SL, 24 ag. 2010, rad. 34393 reiterada en providencia SL16582-2016).

Así las cosas, hechas las operaciones matemáticas del caso teniendo para su cálculo el valor del salario más el auxilio de transporte, le corresponde a la demandante recibir por concepto de cesantías la suma de \$421.237 para el año 2012 y de \$240.166 por el año 2013, para un total de **\$661.403.**

Frente a los **INTERESES SOBRE A LAS CESANTÍAS**, en el lapso del 2 de mayo de 2012 hasta el 11 de mayo del año 2013, ascienden a la suma de **\$38.945.**

PRIMAS DE SERVICIO

En virtud de lo dispuesto en el artículo 306 del CST, modificado por el artículo 2 de la Ley 1788 de 2016, el empleador se encuentra obligado a pagar a su empleado o empleados, esta prestación social que corresponderá a 30 días de salario por año, el cual se reconocerá en dos pagos, así: la mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros veinte días de diciembre. Su reconocimiento se hará por todo el semestre trabajado o proporcionalmente al tiempo trabajado. Ahora al ser una prestación social se debe incorporar el auxilio de transporte. Adeudándose por este concepto para el año 2012 la suma de \$421.237 y para el año 2013 de \$240.166, para un total **de \$661.403.**

VACACIONES COMPENSADAS

Considera necesario esta Sala precisar que las vacaciones fueron creadas con el ánimo, o mejor con el fin, que los trabajadores pudieran descansar, no obstante hay algunos casos excepcionales, en los que es posible pagarlas compensándolas en dinero, entre otras, a la terminación del contrato de trabajo cuando por cualquier causa el trabajador no ha disfrutado de éstas (art.189 CST), ahora,

como base para liquidar la compensación en dinero de este concepto se toma el último salario devengado por el trabajador (art. 189 #3) y el termino para su liquidación está consagrado en el artículo 186 del CST, al establecer que todo trabajador tiene derecho a 15 días hábiles continuos de vacaciones por cada año de trabajo, o proporcionalmente cuando se lleve menos de un año de trabajo y el contrato de trabajo se termina.

Efectuado el cálculo correspondiente el valor adeudado por este concepto asciende a **\$302.937.**

Sea la oportunidad para recordar que las vacaciones compensadas, a diferencia de las prestaciones sociales, no se tienen en cuenta para efectos de la aplicación de la sanción moratoria del artículo 65 del CST, por lo tanto, procede su indexación, desde la terminación del contrato de trabajo hasta la fecha de su pago.

INDEMNIZACIÓN DESPIDO.

Frente a la terminación del contrato por parte de la empleadora demandada, y tratándose de un contrato a término indefinido, la referida demandada tenía que aducir y probar una justa causa de terminación del contrato y ello no aconteció en el proceso, dando así lugar al pago de la referida indemnización, la cual, en los términos del art 64 de CST, con base en el salario del último año de servicio demostrado en el proceso (589.500 –SMLMV año 2013), por 1 año y 10 días (370 días) laborados, equivale a **\$600.416**, suma que deberá ser debidamente indexada.

INDEMNIZACIÓN MORATORIA

Establece el art. 65 C.S.T., modificado por la Ley 789 de 2002, Artículo. 29 que: *“si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo...”*.

Ahora, es de anotar que dicha norma no opera de manera automática, sino que es el juzgador quien debe analizar y hacer juicios de valor razonables, sobre la conducta asumida por el empleador cuando omitió el pago o porque no se canceló a tiempo y dejó de consignar las acreencias que tenía a su cargo.

Así las cosas, no basta entonces la simple manifestación de que el empleador ha obrado de buena fe, deben demostrarse razones que tenga fuerza suficiente para justificar el incumplimiento en el que se ha incurrido, sin que en el caso particular se acreditara una justificación válida para que Brilladora Esmeralda omitiera el reconocimiento de los derechos laborales de la demandante, es decir, no obra prueba en el proceso de circunstancias que revelen buena fe en el comportamiento del empleador demandado al incumplir sus obligaciones, sin embargo, en este evento, la causación de la indemnización moratoria debe correr únicamente hasta el **24 de febrero de 2014** pues en aquella calenda conforme al certificado de la Cámara de Comercio de Cali obrante en el plenario, se aprecia la anotación que mediante Auto Nro. 400-002764 del 24 de febrero de 2014, la Superintendencia de Sociedades autorizó el inicio del proceso de liquidación judicial, y en atención a ello, conforme al artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, se prohíbe a los administradores, asociados y controlantes de disponer de cualquier bien que forme parte del patrimonio liquidable del deudor o de realizar pagos o arreglos sobre obligaciones anteriores al inicio del proceso de liquidación judicial, a partir de la fecha de la providencia que lo decreta, luego, a partir del momento en que la sociedad accionada, entró en proceso de liquidación judicial, perdió la potestad de disponer de sus bienes, estaba inhabilitada legalmente para pagar los créditos laborales que se causaron a favor de la demandante antes de la apertura del proceso de liquidación, de modo que en adelante no podría causarse la sanción moratoria, la cual tiene como supuesto la facultad de disposición que sobre su patrimonio tenga el empleador, de modo que si se le ha privado de tal facultad, no le es exigible el pago de la sanción. (ver al respecto la providencia CSJ SL2833-2017).

En consecuencia, el monto a reconocer a la demandante por concepto de sanción moratoria, la que se causa a razón de un día de salario por cada día de retardo,

teniendo en cuenta un salario diario de \$19.650, la que corre desde el 11 de mayo de 2013 y hasta el 24 de febrero de 2014 equivalente a 284 días de salario, obteniéndose una suma de **\$5.580.600.**

INDEMNIZACIÓN MORATORIA DEL ARTÍCULO 99 DE LA LEY 50 DE 1990 POR NO CONSIGNAR LAS CESANTÍAS A UN FONDO ADMINISTRADOR.

El numeral 3 del artículo 99 de la ley 50 de 1990, es del siguiente tenor literal:

“3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo...”

En este evento, como se explicó en ítems anteriores, no quedó acreditado que la empresa Brilladora Esmeralda Ltda. haya consignado al 14 de febrero de 2013 las cesantías del trabajador, correspondientes al año 2012, a un fondo administrador, configurándose la mala fe, y si bien las indemnizaciones moratorias de los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990 no corren conjuntamente, sí hay lugar a condenar solidariamente a las demandadas a pagar esta indemnización, por 85 días comprendidos entre el 15 de febrero y el 10 de mayo de 2013, día anterior a aquel en que empezó a correr la moratoria del artículo 65 del CST, a razón de un salario diario de \$19.650, y es que aunado a lo expresado esta condena solo se genera hasta la finalización del contrato de trabajo, razón por la cual, por este concepto no puede imponerse condena más allá del 11 de mayo de 2013 según lo ha entendido la CSJ SCL en sentencias como la SL 16884 del 16 de noviembre de 2016, rad. 40.272. Así las cosas, por este concepto se adeuda a la actora la suma de **\$1.670.250.**

COSTAS PROCESALES de primera instancia, a cargo de la Sociedad Brilladora Esmeralda Ltda. -liquidada- y del Departamento de Antioquia vencidos en el proceso y a favor de la demandante. Liquídense las de primera por la Secretaría del Juzgado de origen.

Sin costas en esta instancia ante la prosperidad del recurso de alzada.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí el 13 de septiembre de 2018, dentro del Proceso Ordinario Laboral promovido por la señora **LUZ AMPARO CANO PATIÑO** en contra de la Sociedad **BRILLADORA ESMERALDA LIMITADA LIQUIDADA** y el **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** en cuanto absolvió a las demandadas de todas las pretensiones; para en su lugar, **CONDENAR** a éstas últimas de manera solidaria a pagar a la demandante las siguientes sumas, según las consideraciones de ésta sentencia:

- Salarios adeudados: **\$1.180.410.**
- Auxilio de transporte: **\$847.990.**
- Cesantías: **\$661.403.**
- Intereses a las cesantías: **\$38.945.**
- Prima de servicios: **\$661.403.**
- Vacaciones: **\$302.937.**
- Sanción moratoria por la no consignación de las cesantías **\$1.670.250.**
- Indemnización moratoria por no pago de prestaciones sociales **\$5.580.600.**
- Indemnización Despido sin justa causa **\$600.416.**
- Indexación de las sumas correspondientes a vacaciones e indemnización por despido injusto, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: COSTAS PROCESALES primera instancia, a cargo de la Sociedad Brilladora Esmeralda Ltda. -liquidada- y del Departamento de Antioquia vencidos en el proceso y a favor de la demandante. Líquidense las de primera por la Secretaría del Juzgado de origen.

Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Se ordena regresar el expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c74952c7fa854d504033c0b63122f98f472dd1200dc0716f552aa441773829af**

Documento generado en 02/08/2023 03:21:16 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>